



La consulta plantea si, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, procede la creación de un fichero de sociedades profesionales por parte de la Corporación consultante y si el mismo deberá ser considerado como fichero de titularidad pública o privada.

Con carácter previo al análisis de las cuestiones planteadas, debe hacerse una somera referencia al régimen previsto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, habida cuenta de la incidencia que el mismo reviste en la creación del registro y del fichero de sociedades profesionales a los que se refieren aquellos acuerdos.

Tal y como dispone el artículo 1.1 de la Ley 2/2007, “Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de la presente Ley”. A tal efecto “es actividad profesional aquella para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional”.

La constitución y modificaciones de la sociedad deberán ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil, exigiendo el artículo 8.2 que la inscripción incorpore:

- a) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.
- b) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de constitución y notario autorizante; y duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo determinado.
- c) La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social.
- d) Identificación de los socios profesionales y no profesionales y, en relación con aquéllos, número de colegiado y Colegio Profesional de pertenencia.
- e) Identificación de las personas que se encarguen de la administración y representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada una de ellas.

Además, deberán incluirse las menciones exigidas por el artículo 7.2 para la escritura constitutiva, en la que deberán figurar:

- a) La identificación de los otorgantes, expresando si son o no socios profesionales.
- b) El Colegio Profesional al que pertenecen los otorgantes y su número de colegiado, lo que se acreditará mediante certificado colegial, en el



que consten sus datos identificativos, así como su habilitación actual para el ejercicio de la profesión.

c) La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social.

d) La identificación de las personas que se encarguen inicialmente de la administración y representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada una de ellas.

Según dispone el artículo 8.4, “La sociedad se inscribirá igualmente en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional que corresponda a su domicilio, a los efectos de su incorporación al mismo y de que éste pueda ejercer sobre aquélla las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico sobre los profesionales colegiados”, añadiendo que “La inscripción contendrá los extremos señalados en el apartado 2 de este artículo. Cualquier cambio de socios y administradores y cualquier modificación del contrato social serán igualmente objeto de inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales”.

A tal efecto, “El Registrador Mercantil comunicará de oficio al Registro de Sociedades Profesionales la práctica de las inscripciones, con el fin de que conste al Colegio la existencia de dicha sociedad y de que se proceda a recoger dichos extremos en el citado Registro Profesional”.

El artículo 8.5 concluye que “La publicidad del contenido de la hoja abierta a cada sociedad profesional en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales se realizará a través de un portal en Internet bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. El acceso al portal de Internet será público, gratuito y permanente”. Además, las Comunidades Autónomas podrán establecer un portal en Internet en su ámbito territorial”.

A fin de garantizar esta publicidad “los Colegios Profesionales remitirán periódicamente al Ministerio de Justicia y a la Comunidad Autónoma respectiva las inscripciones practicadas en sus correspondientes Registros de Sociedades Profesionales”.

Las sociedades profesionales podrán contar con socios profesionales o no profesionales, siendo los primeros, según el artículo 4.1 “Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social y que la ejerzan en el seno de la misma” y “las sociedades profesionales debidamente inscritas en los respectivos colegios profesionales que, constituidas con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, participen en otra sociedad profesional”. El artículo 4.4 aclara que “No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurra causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o profesiones que constituyan el objeto social, ni aquellas que se encuentren inhabilitadas para dicho ejercicio en virtud de resolución judicial o corporativa”.

Como ya se ha indicado, la inclusión de la sociedad en el registro del colegio profesional correspondiente se efectúa “a los efectos de su incorporación al mismo y de que éste pueda ejercer sobre aquélla las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico sobre los profesionales colegiados”.

En este sentido, el artículo 9.2 establece en su párrafo segundo que “Sin perjuicio de la responsabilidad personal del profesional actuante, la sociedad profesional también podrá ser sancionada en los términos establecidos en el régimen disciplinario que corresponda según su ordenamiento profesional”.

Asimismo, conforme al artículo 9.1 “La sociedad profesional y los profesionales que actúan en su seno ejercerán la actividad profesional que constituya el objeto social de conformidad con el régimen deontológico y disciplinario propio de la correspondiente actividad profesional”. De este modo, “Las causas de incompatibilidad o de inhabilitación para el ejercicio de la profesión que afecten a cualquiera de los socios se harán extensivas a la sociedad y a los restantes socios profesionales, salvo exclusión del socio inhabilitado o incompatible en los términos que se establece en la presente Ley”.

Conforme a lo que se ha venido indicando, los Colegios Profesionales deben proceder a la creación de los correspondientes registros de sociedades profesionales, con indicación de los datos a los que se refiere la propia Ley 2/2007, encontrándose la finalidad de dicho registro vinculada al ejercicio de las competencias del Colegio en lo relativo al control del ejercicio de la profesión, prevención del intrusismo profesional y ejercicio de las potestades disciplinarias previstas en la legislación de colegios profesionales.

Por este motivo, la Ley impone la creación del mencionado Registro, que habrá de ser considerada como fichero de datos de carácter personal, encontrándose vinculada al ejercicio de las potestades de derecho público atribuidas al Colegio.

El artículo 5.1 m) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, define los ficheros de titularidad pública como “los ficheros de los que sean responsables los Órganos constitucionales o con relevancia constitucional del Estado o las Instituciones Autonómicas con funciones análogas a los mismos, las Administraciones Públicas Territoriales, así como las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas y las Corporaciones de derecho público siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de derecho público”.

En el presente caso, dado que el fichero habrá de constituirse para el ejercicio de dichas potestades, el mismo deberá ser considerado como fichero de titularidad pública, debiendo adoptarse el correspondiente Acuerdo de



creación del mismo, a cuyo efecto, dispone el artículo 53.4 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 que “la creación, modificación o supresión de los ficheros de los que sean responsables las Corporaciones de derecho público y que se encuentren relacionados con el ejercicio por aquéllas de potestades de derecho público deberá efectuarse a través de acuerdo de sus órganos de gobierno, en los términos que establezcan sus respectivos Estatutos, debiendo ser igualmente objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente”.